

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA UN REGISTRO DE DEUDA CONSOLIDADA

Boletín N° 14.743-03

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Mensaje del entonces Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación el 30 de agosto de 2011 (boletín N°7886-03), en primer trámite constitucional y reglamentario; la iniciativa, fue sustituida, antes de su aprobación en general, por el Mensaje ingresado el 13 de diciembre de 2021, por su S.E. el Presidente de la República don Gabriel Boric Font, y se encuentra con urgencia calificada de Suma.

Asistió en representación del Ejecutivo, la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera junto con la asesora de Mercado de Capitales, señora Catalina Coddou Liendo, el Coordinador de Mercado de Capitales, señor Alejandro Puente Gómez y el Director Regulación Bancos y Entidades Financieras, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), señor Jaime Forteza Saavedra.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1) Idea matriz o fundamental del proyecto:

Solucionar los inconvenientes que actualmente se tienen en el mercado crediticio respecto de los derechos de los deudores, mediante la creación de un sistema consolidado de información que permita facilitar el acceso a financiamiento y en mejores condiciones, para que, por una parte, se regulen los agentes comerciales, y por la otra parte, se refuercen y se hagan valer los derechos de los deudores, respecto de su propia información, todo ello en el marco de prevenir el sobreendeudamiento de las personas y sus familias.

2) Comisión técnica:

La Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

3) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

No hubo en este trámite nuevas normas en esa condición.

4) Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidos por esta Comisión de Hacienda:

Según consigna el informe de la Comisión de Economía, el artículo quinto transitorio del texto aprobado, es de competencia de esta Comisión de Hacienda.

5) Artículos nuevos: No hubo

6) Artículos modificados: No hay

7) No se presentaron indicaciones.

8) Diputado informante: el señor Jaime Sáez Quiroz.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de ley se basa en una iniciativa presentada por el Expresidente Piñera en su primer mandato, el 30 de agosto de 2011¹. Tal proyecto buscaba regular el tratamiento de datos de obligaciones económicas, señalando que aquellos debieran ser veraces, exactos y actualizados; efectuarse con pleno respeto a los derechos de los titulares de los mismos; cumplir con toda la normativa sobre calidad de la información y de seguridad y resguardo vigente; y que no debieran inducir a error o engaño. Sin embargo, no avanzó en su tramitación más allá del primer trámite constitucional.

Manteniendo los ejes y objetivos de aquel proyecto, la iniciativa que se presentó a la Comisión tiene el siguiente contenido:

1. Creación del Registro de Deuda Consolidada. Se establece que la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF") será el administrador de un registro de obligaciones denominado "Registro de Deuda Consolidada" ("Registro") al que determinados oferentes de crédito bancarios y no bancarios estarán obligados a reportar información respecto de operaciones de crédito de dinero ("obligaciones reportables").

2. Ampliación de la noción de titulares de la información. La ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, sólo considera como titulares de los datos a las personas naturales. Sin embargo, dadas las características propias de las obligaciones económicas, el proyecto de ley amplía el concepto de titulares de datos (definidos como "deudores" en el proyecto de ley) tanto a personas naturales como a personas jurídicas, de manera de que ambas puedan ejercer sus derechos en esta materia.

3. Extensión del concepto de información comercial que puede ser tratada. El proyecto de ley extiende el concepto de información comercial que puede ser tratada, estableciendo que: (i) se debe informar al Registro tanto información de la deuda morosa como de la deuda al día; y (ii) la información de la deuda debe ser reportada al Registro tanto por entidades bancarias como no bancarias. Específicamente, se establece que la información debe ser reportada por los bancos, las compañías de seguro, los emisores de tarjetas de crédito, las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito, las sociedades securitizadoras por los patrimonios separados que constituyan o tengan, y las personas naturales o jurídicas así como otras entidades que cumplan con las condiciones que establezca la CMF por norma de carácter general ("reportantes").

4. Acceso de reportantes, mandatarios y deudores. De forma de resguardar la información de las personas, y permitir el correcto uso de la misma, el proyecto de ley especifica que solo podrán acceder al Registro: (i) reportantes; (ii) mandatarios de reportantes informados a la CMF; y (iii) deudores o terceros autorizados por estos últimos. Adicionalmente, señala que tanto los reportantes como sus mandatarios deben cumplir estándares mínimos de seguridad, establecidos mediante norma de carácter general de la CMF y mantener reserva de la información obtenida del

¹ [Boletín N° 7886-03](#), regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.

registro, la cual, una vez usada para la evaluación de riesgo comercial y crediticio, debe ser eliminada.

5. Derechos de los deudores. Se contempla una serie de derechos para los deudores (titulares), los cuales se ejercen directamente ante el reportante o a través del acceso al Registro y son de carácter gratuito. Estos derechos son:

(i) Derecho de acceso: El deudor tendrá derecho a solicitar a la CMF el acceso a la información relativa a su persona y sus obligaciones que esté almacenada en el Registro. Dicho acceso podrá llevarse a cabo a través de medios o sistemas digitales u otros adicionales que la CMF determine para efectos de una mayor cobertura.

(ii) Derecho de actualización, rectificación o complementación: El deudor tendrá derecho a solicitar la actualización, rectificación o complementación de la información relativa a su persona o a sus obligaciones. En caso de que el reportante deniegue la solicitud, deberá hacerlo de manera fundada. Por otro lado, en caso de que la acepte, deberá modificar la información almacenada en su base de datos, cuando corresponda, y dar aviso a la CMF para que también la modifique en el Registro.

(iii) Derecho a cancelar datos: El deudor tendrá derecho a solicitar al respectivo reportante, la eliminación de su información o de sus obligaciones, almacenada en el Registro que, de conformidad a esta ley, no corresponda ser almacenada. En caso de que el reportante deniegue la solicitud, deberá hacerlo de manera fundada. Por otro lado, en caso de que la acepte, deberá eliminar la información almacenada en su base de datos, cuando corresponda, y dar aviso a la CMF para que también la modifique en el Registro.

En caso de que no sea posible determinar al reportante que hubiere entregado la información almacenada en el registro, y que de conformidad a esta ley no correspondía ser almacenada en dicho registro, el deudor podrá solicitar a la Comisión la eliminación de dicha información.

6. Sanciones. Se establece que, en caso de infracciones a esta normativa se sancionará a los reportantes de acuerdo con las disposiciones del decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Adicionalmente, se señala que se puede sancionar a los reportantes prohibiendo su acceso al Registro por hasta 1 año. Por último, se establecen sanciones penales para quienes revelen datos a terceros, sin la autorización que corresponda.

7. Transitoriedad: En consideración a los nuevos desafíos técnicos y operativos que implica el proyecto, se contempla un periodo razonable para su entrada en vigencia.

Específicamente, señala que la ley entrará en vigencia a los 20 meses contados desde su publicación en el Diario Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, se señala que la CMF deberá emitir las normativas correspondientes dentro del plazo de 12 meses, contado desde la publicación de la ley, y que deberá tener el Registro totalmente habilitado dentro del plazo de 15 meses, contado desde la publicación de la ley, de manera que los reportantes puedan comenzar a reportar sus obligaciones desde antes de la entrada en vigencia de la ley.

III.-INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El informe financiero N° 77, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y presentado en esta Comisión en el día de hoy, actualiza los datos contenidos en el informe financiero N°142, de 2021, que acompañó al proyecto a su ingreso, en el siguiente sentido:

EFFECTO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL

La implementación del proyecto de ley implica el desarrollo e inversión en infraestructura informática que permitirá adaptar los actuales sistemas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El costo estimado por requerimientos tecnológicos asciende a \$671.618 miles de 2023 para el primer año y \$181.870 miles de 2023 para el segundo año ⁽²⁾.

Adicionalmente, se deben considerar recursos para la mantención de la citada plataforma. Esto incluye la mantención de una nube con que respalde la información y servicios de ciberseguridad. Para ello, se consideran \$29.938 miles de 2023 el segundo año de implementación y \$115.004 miles de 2023 en régimen ⁽³⁾.

Tabla 1: Costos de Implementación y Mantención del Registro Consolidado de Obligaciones Crediticias y su Plataforma Asociada
(Miles de Pesos de 2023)

			Total	
	Año 1	Año 2	Transitorio	Régimen
Creación del Registro (subt. 29)	671.618	181.870	853.488	0
Mantención Infraestructura (subt. 22)	0	29.938	29.938	115.004
Total	671.618	211.808	883.426	115.004

En virtud de lo anterior, las presentes indicaciones conllevan un mayor gasto fiscal transitorio de \$883.426 miles y \$115.004 miles en régimen.

FUENTE DE LOS RECURSOS

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto asignado a la Comisión para el Mercado Financiero y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto del sector público.

Fuentes de Información

Informe Financiero N° 142, de 2021.

² Para determinar los montos expuestos para el primer y segundo año de implementación se consideró la construcción de un registro de consultas con una volumetría promedio de 206 consultas por Minuto. En base a dicha volumetría se simuló el costo de contratación de un equipo desarrollador compuesto por un jefe de proyecto, arquitecto (de sistemas), un experto en ciberseguridad, un administrador de base de datos, un analista, un diseñador, un encargado de desarrollo y operaciones y un profesional en QA (control de calidad). Para determinar el costo del equipo se utilizaron valores de Mercado Público ajustándolo al valor de la Unidad de Fomento a marzo del 2021 y luego dicho valor se lleva a pesos de 2023, considerando la inflación efectiva informada por el Banco Central de Chile (2021-2022) y esperada para 2023 de acuerdo al Escenario Macroeconómico del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2022.

³ Esto considera soporte y mantenimiento; seguridad y ciberseguridad; conectividad y respaldo; producción y desarrollo de hardware, control de calidad y licencias. Para el cálculo de estos costos se utilizan aproximaciones basadas en los valores internacionales de estos servicios, ajustados a pesos chilenos según el precio promedio del dólar del IFP del cuarto trimestre de 2022.

IPC General base promedio 2018=100, índice (empalmado). Base de datos estadísticos. Banco Central de Chile (2021-2022).

Informe de Finanzas Públicas, cuarto trimestre 2022, Dirección del Presupuestos.

IV.- SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

La Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner se refirió en primer lugar a la idea de legislar sobre un registro consolidado de deuda, indicando que esta ha sido presentada en distintos proyectos de ley. Sin embargo, en el contexto económico actual- post estallido social y aún dimensionando los efectos de la pandemia (además de otros factores mundiales) las medidas tendientes a prevenir el sobreendeudamiento de las personas y familias cobran especial importancia.

Por ello, se optó por presentar un nuevo proyecto de ley con características simples, enfocado en la creación de un registro único y consolidado de las deudas, y en la protección de la seguridad de los derechos de los deudores.

1. Actualmente, los Bancos, las sociedades de apoyo al giro y las Cooperativas de Ahorro y Crédito con patrimonio sobre 400.000 UF, están obligadas a reportar a la CMF los créditos vigentes, y, asimismo, pueden acceder a este registro para evaluar el riesgo de potenciales clientes.

2. En contraste, los oferentes de crédito no bancario (como emisores de tarjetas de crédito, compañías de seguro y otros) no están sujetos a esta obligación y, en consecuencia, no acceden a este registro para hacer evaluación de riesgos.

Problemas de la parcialidad de la información

1. Genera mercados desintegrados, reduciendo la competencia en el otorgamiento de créditos.

2. Empeora las condiciones de financiamiento de los buenos pagadores, en la medida que los oferentes de crédito no tienen información suficiente que permita distinguirlos.

3. Fomenta el sobreendeudamiento y con ello, malas decisiones financieras para las personas.

4. Debilita la supervisión financiera, y, en consecuencia, la posibilidad de oportuno diseño de políticas públicas, puesto que los reguladores no pueden acceder a información completa.

Objetivos del proyecto de ley

Mejora la información sobre obligaciones crediticias

- Mejorar información sobre el comportamiento de pago, de manera que los buenos pagadores puedan beneficiarse con menores tasas.

- Incorporar Oferentes de Créditos No Bancarios y otras entidades como aportantes y receptores de información.

- Permitir que las personas tomen mejores decisiones sobre sus niveles de endeudamiento.

- Acceso a mejor información para políticas de educación financiera.

Entregar herramientas a regulador y otras instituciones públicas.

- El Registro será administrado y protegido por la CMF.

- Será una herramienta para supervisar el comportamiento del mercado financiero.

financiera.

Reforzar los derechos de los deudores.

credicia

información, cuando corresponda.

Contenido del Proyecto de Ley

1. Registro de Deuda Consolidada

• El proyecto crea un nuevo registro de información crediticia, denominado “Registro de Deuda Consolidada” (“RDC”), que es administrado por la CMF, como Registro Oficial de información relativa a las obligaciones crediticias.

• Los oferentes de crédito bancarios y no bancarios y otras entidades estarán obligadas a reportar a la CMF información respecto de obligaciones crediticias, la que será almacenada en el RDC.

• Serán obligaciones reportables las de operaciones de crédito, así como las de otras operaciones de carácter financiero, de conformidad a lo que pueda establecer la CMF mediante Norma de Carácter General.

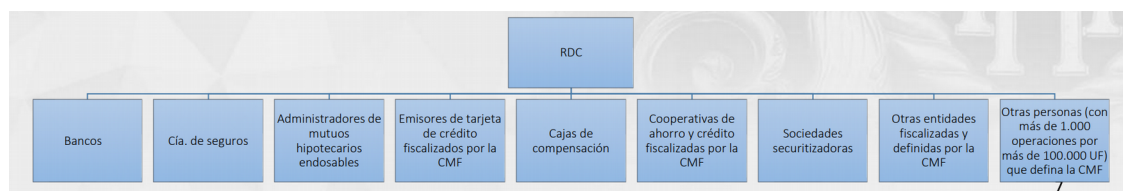
• Los oferentes de créditos deberán informar todas las obligaciones reportables de sus clientes, especificando: i) identidad del deudor, ii) naturaleza de deuda, iii) principales términos y condiciones, iv) plazos, v) garantías constituidas, vi) estado de cumplimiento, y vii) toda otra información relacionada que pueda determinar la CMF.

2. Reportantes del RDC

• Los bancos, las compañías de seguro, los agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, los emisores de tarjeta de crédito fiscalizados por la CMF, las CCAF y las CAC fiscalizadas por la CMF, respecto de obligaciones reportables en las que tengan la calidad de acreedor.

• Las sociedades securitizadoras, respecto de las obligaciones reportables en que el acreedor sea un patrimonio separado constituido por estas, y cualquier otra entidad fiscalizada por la CMF, que esta determine a través de Norma de Carácter General.

• Las personas naturales o jurídicas y otras entidades que, habiendo celebrado en el último año calendario operaciones en calidad de acreedor de obligaciones reportables, cumplan con las condiciones que establezca la CMF por Norma de Carácter General (a lo menos 1.000 operaciones, por montos totales superiores a 100.000 UF).



3. Acceso al RDC. La CMF será la encargada de otorgar acceso al RDC a los reportantes, sus mandatarios, los deudores y los terceros autorizados por los deudores.

• Acceso de Reportantes: solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos y respecto de obligaciones específicas.

- No podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra, hace más de cinco años.
- Para tener acceso a la información del deudor, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo de este.
- Sólo podrán acceder al RDC con la finalidad de evaluar el riesgo comercial, riesgo crediticio y la gestión de riesgos, bajo sanciones corporales y de multas.
- Acceso Deudores: Toda persona natural o jurídica, puede acceder al RDC, respecto de toda su información y la de sus obligaciones, que se encuentre almacenada.
- Sin perjuicio de lo anterior, los deudores serán notificados sobre toda consulta a su respecto.
- El deudor podrá autorizar de manera expresa dicha facultad en terceros.

4. Derechos de los deudores

- El proyecto implica reconocer que los deudores son los dueños de sus datos al consagrar la existencia de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
- Los derechos mencionados son irrenunciables, de carácter gratuito y podrán ejercerse de forma presencial o mediante medios digitales.
- Por primera vez se reconocen claramente estos derechos a todos los deudores, ya que la ley de datos personales solo aplica para personas naturales (no aplica por ejemplo a empresas de menor tamaño) y la regulación del boletín comercial no reconoce estos derechos de forma expresa.
- Los derechos son claramente regulados y fiscalizados por la CMF, a diferencia de la actualidad que no existe un regulador y fiscalizador en materia de datos financieros.
- Lo anterior implica un avance significativo en la posición de los deudores frente al tratamiento de sus datos financieros.

Los derechos de los deudores reconocidos en el PdL son:

- Derecho de acceso: Toda persona, natural o jurídica, puede acceder al RDC, respecto de toda su información y la de sus obligaciones, que se encuentre almacenada.
- Derecho de actualización, rectificación o complementación: Toda persona, natural o jurídica, puede solicitar al respectivo reportante, la actualización, rectificación o complementación de su información o de sus obligaciones, almacenada en el RDC.
- Derecho de cancelación: El deudor tendrá derecho a solicitar al respectivo reportante, la eliminación de su información o de sus obligaciones, almacenada en el RDC que, de conformidad a la ley, no corresponda ser almacenada en dicho registro.

Estos 3 derechos principales van acompañados de otros resguardos para los deudores, como la prohibición de los acreedores de acceder a información de más de 5 años, la obligación de que estos eliminen la información una vez hecha la evaluación crediticia, o la limitación de solicitar información solo de deudores específicos, prohibiendo accesos de forma masiva, entre otros.

5. Facultades y deberes de la CMF

La CMF es la encargada de mantener y administrar el RDC y de fiscalizar que los reportantes entreguen información de manera completa, actualizada y exacta.

Para ello podrá:

- i. Determinar obligaciones reportables.
- ii. Determinar requisitos mínimos para ser reportantes.
- iii. Regular la operatividad del RDC.
- iv. Determinar las condiciones, formas y plazos de entrega de información al RDC.
- v. Fiscalizar a los reportantes.
- vi. Exigir estándares mínimos de seguridad a reportantes y sus mandatarios.

6. Deberes de los reportantes

- Los reportantes estarán obligados a entregar información al registro en la forma que determine la CMF, y serán responsables sobre la exactitud de la información entregada. Por otro lado, deberán actualizar, rectificar o eliminar información en base a solicitudes de los deudores y cumplir con estándares mínimos de seguridad de información.

- Adicionalmente, estarán obligados a garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiendo la información a la que hayan tenido acceso en virtud de esta ley contra su pérdida, tratamiento ilegítimo, filtración, daño o destrucción.

- Los reportantes deberán eliminar la información obtenida del RDC una vez que haya sido utilizada para la respectiva evaluación crediticia. De esta forma se evita y se sanciona el uso de la información del registro más allá de los fines del mismo ("listas negras"), ya que ahora la CMF va a tener la facultad de fiscalizar y sancionar (sin necesidad de asistir a un tribunal).

- Se establece que, los incumplimientos a la ley o a las normas relacionadas que emita la CMF, se sancionará bajo las reglas de la CMF.

Mejoras Comisión de Economía: Aclaratorias del texto o del espíritu del Proyecto:

1. Registro oficial de información crediticia.
2. Se precisa que la consulta es respecto de personas determinadas y para operaciones específicas.
3. Suficiencia del registro (no pueden requerirse antecedentes adicionales).
4. Facultad exclusiva del administrador (CMF).
5. Forma de otorgar el consentimiento por parte del deudor.

Mejoras de fondo directamente relacionadas con el Proyecto:

1. Consentimiento: Se traslada la carga del soporte a la entidad que consulta el registro, y se definen sanciones por mal uso del registro.
2. Notificación: Se establece la oportunidad de enrolamiento de deudores para ser notificados de las consultas a su información, y se establece un reporte periódico.

Mejoras de fondo sobre temas conexos al PDL.

1. Fiscalización: Fortalecimiento sobre régimen sancionatorio. Subsisten otras acciones (Ej: Consumidor) que pudieran resultar en otras sanciones.

2. Coordinación: Se consagra expresamente el principio de coordinación de la Ley N°19.880 y la obligación de consultas públicas de la Ley N°21.000.

Modificaciones fuera de las ideas centrales

1. Obligación de eliminar información no-anonimizada, más allá del registro, que esté prescrita o se haya extinguido o vuelto inexigible hace más de 5 años, y establecimiento de sanciones al respecto. Va más allá del Registro de que trata de este PDL, y se superpone con regulaciones similares en PDL de Datos Personales y Olvido Financiero.
2. Obligación de presentar respuestas fundadas ante el rechazo de una solicitud de crédito. Se superpone con regulación de la Ley del Consumidor, siendo menos exigente que esta última.
3. Restricción de acceso a información negativa. Actualmente, la información negativa está disponible sin consentimiento. Con esta modificación, se incentiva el uso de información alternativa, con distintos niveles de calidad y sin protección a los derechos de los deudores.

Terminó su exposición señalando que para el Ministerio de Hacienda es importante que esta Comisión se familiarizara con el contenido del PDL en detalle, por atender materias financieras muy relevantes para la cartera.

El diputado Saéz preguntó si las deudas de más de cinco años que estando castigadas ingresarán al registro.

El diputado Mellado explicó que los bancos hoy, al contratar un crédito hipotecario, envían cartola trimestral del crédito. Preguntó si es posible que exista un registro consolidado de deuda y que se a su titular, a fin de que la gente pueda saber cuánto debe.

El diputado Soto señaló que la consolidación de información siempre ayuda a alcanzar los objetivos de iniciativas como estas y facilita la vida de las personas. Sin embargo, se está entregando mucha información a la CMF, por lo que resulta esencial que existan límites y sanciones para quienes hacen mal uso de esta información. En este sentido, sostuvo, las multas que se ven en el proyecto no parecen ser suficientes. Preguntó cuáles son los mayores resguardos que se tomarán.

El diputado Romero se refirió al uso de la palabra prescripción, puesto que esta institución requiere de declaración judicial para operar. En este orden de ideas, preguntó desde qué perspectiva se consideró la prescripción en el proyecto, si desde una perspectiva civil o bien de otra forma. Finalmente preguntó si este es el único registro que existirá o si seguirá existiendo registros como Equifax o Dicom.

La diputada Yeomans manifestó preocupación de las consecuencias del manejo de la información y el hecho de que se comparta esta información para hipótesis no contempladas en la ley, afectándose así cuestiones como la apertura de cuentas bancarias.

La Subsecretaria señaló que las deudas castigadas si están en el registro, pero no pueden verse. En efecto debe distinguirse entre lo que puede ver un solicitante de información y el registro completo que mantiene la CMF. Agregó que la

información no está abierta para ser consultada por cualquier razón, sólo puede consultarse por hipótesis específicas.

A su vez, explicó que el registro busca que esté toda la información consolidada y que las personas puedan acceder a dicha información. En este sentido, se enrolará a las personas y al momento de enrolarlas, se les pedirá consentimiento para que la CMF les mande un reporte.

Respecto a las sanciones, señaló que no sólo se contempla una sanción de límite del acceso al registro de un año, sino que hay otras sanciones como lo son la aplicación de multas y penas privativas de libertad.

El diputado Soto señaló que el uso de la palabra prescripción e inexigibilidad no está en su sentido técnico, porque más bien lo que hay en el proyecto, es una prohibición de entregar información.

El diputado Romero sostuvo que la intención es precisar el alcance de la norma, de forma que luego en su aplicación no haya problemas. En esta línea, señaló que cuando se habla de extinción, debe haber operado un modo de extinguir obligaciones.

El diputado Soto estimó que una cosa es informar y otra cosa es tener derecho a acceder a esa información. En este sentido, preguntó si las deudas estarán informadas, pero desde que se cumplen cinco años no podrá accederse a dicha información.

La Asesora de Mercado de Capitales señorita Catalina Coddou, explicó que la obligación es de informar a la entidad que mantiene este registro, y que una cosa es el plazo para mostrar la información contenida en el registro, y otra distinta, la información que sale del registro por extinción de las deudas o prescripción. En este sentido, indicó que la intención fue ampliar las opciones, de forma tal de beneficiar a los deudores, y que salga esta información del registro aun cuando no haya operado la prescripción por declaración judicial, como ocurre ante la inactividad de las instituciones financieras para obtener el cobro.

El Director de Regulación Bancos y Entidades Financieras de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Jaime Forteza Saavedra, se refirió a las sanciones que contempla el proyecto, señalando que se consideran penas privativas de libertad que van desde presidio menor a presidio en su grado medio. Asimismo, la CMF tiene un deber de reserva y una política propia sobre acceso a la información, donde se restringe al interior del órgano, quienes pueden acceder a estos datos, atendido el carácter sensible de ellos.

VOTACIÓN DE LA NORMA DE COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN DE HACIENDA:

Disposición transitoria:

“Artículo quinto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo al presupuesto asignado a la Comisión para el Mercado Financiero, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto del sector público.”.

Puesta en votación el artículo resultó aprobado por la unanimidad de nueve de sus miembros presentes. Votaron a favor las diputadas y diputados Mellado, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Soto, Von Mühlenbrock y Yeomans (Presidenta).

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos sometidos a su conocimiento, en la forma explicada.

Tratado y acordado en la sesión ordinaria celebrada el 19 de abril del año en curso, con la asistencia presencial o remota, de los diputados señores, Miguel Mellado Suazo, Guillermo Ramírez Diez, Agustín Romero Leiva, Jaime Sáez Quiroz, Alexis Sepúlveda Soto, Raúl Soto Mardones, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y señoras, Camila Rojas Valderrama y Gael Yeomans Araya (Presidenta).

Sala de la Comisión, a 19 de abril de 2023.

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de Comisiones